

Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Chiapas  
OFICIALIA DE PARTES

27 ENE 2020

15:57 hrs

RECIBIDO

FIRMA:

PRINCIPAL

1

Esta foja forma parte del escrito de demanda presentada, que dará inicio al Juicio Contencioso Administrativo, en contra de la Resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019, suscrita por el PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. DOCUMENTO CONSTANTE DE 59 FOJAS ÚTILES.

INICIO

EXPEDIENTE NÚMERO: /2020

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN IMPUGNADA: Resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019, dictada por el PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, dictada dentro del procedimiento administrativo de origen HACTG/CM/DRQyD/2016.

ANTECEDENTES:- PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

1.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: HACTG/CM/DRQyD/2016.-

EXSERVIDOR PÚBLICO SANCIONADO, LLAMADO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMO: SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.

ASPECTO DE RELEVANCIA.- 1).- El presente caso a estudio operan el principio NON REFORMATIO IN PEIUS, (no reformar en peor, no reformar en perjuicio) mismo que está contemplado en el artículo 496 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, aplicado en forma supletoria por así permitirlo el numeral 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas. Precepto que reza: "...Artículo 496. Prohibición de la reforma en perjuicio. Cuando la resolución sólo fue impugnada por el imputado o su defensor, no podrá modificarse en su perjuicio...". 2).- El presenta asunto está prescrito, por haber transcurrido más de 3 años. Conste

II. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

(ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS CONFORME AL INCISO D) DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO 035, PUBLICADO EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS NÚMERO 073, TOMO III).

por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en

VERSIÓN PÚBLICA

[REDACTED] en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en términos del último párrafo del artículo 106 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, autorizo al Licenciado [REDACTED] con Cédula profesional número 4096265, para tales efectos, así como para recoger toda clase de documentos, consultar los autos que se formen, realizar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos y para oír y recibir notificaciones a los [REDACTED]

[REDACTED] Ahora bien, con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito vengo a interponer JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en contra de la resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019, dictada por PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS dictada dentro del procedimiento administrativo de origen HACTG/CM/DRQyD/[REDACTED]/2016. Con domicilio para ser emplazado el ubicado en las oficinas que ocupa El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, sito en Calle Central y segunda norte S/N, Colonia Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Teléfono (961) 61 255 11 extensión 2291.

Por lo que en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 1, 3, 6, 101, 102, 103 primer y antepenúltimo párrafo, 104 fracciones I y II inciso "A", 105, 109 fracciones I y II, 115, 125 párrafo primero, fracción I, inciso a); 126, 127 y demás aplicables de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, bajo protesta de decir verdad manifiesto:

I.- NOMBRE DEL DEMANDANTE Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Ya ha quedado precisado en el proemio de este escrito.

II.- LA RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO:

- La resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019, dictada por el PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS dictada dentro del procedimiento administrativo de origen HACTG/CM/DRQyD/[REDACTED]/2016. En la resolución combatida mediante este juicio de nulidad, en ella se me sanciona con una INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL, POR UN LAPSO DE 3 (TRES AÑOS).

- III.- FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN Y ACTO IMPUGNADO: Bajo protesta de decir verdad le manifiesto a esta autoridad jurisdiccional que con fecha 27/11/2019 (27 DE NOVIEMBRE DE 2019), me fue notificada la resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019 dictada por el PRESIDENTE MUNICIPAL

4

3

CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS dentro del procedimiento administrativo número HACTG/CM/DRQyD/2016.

Por lo tanto, el presente Juicio Interpuesto, es presentado en tiempo y forma, tal y como se explicita a continuación:

**OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD**

La notificación fue el día 27 de noviembre de 2019, sirvió efectos el mismo día, iniciando el cómputo el día 28 de noviembre de 2019 y feneciendo el día 27 de enero de 2020, por lo que esta demanda de nulidad está presentada en tiempo y forma. (descontándose los días inhábiles sábados y domingos y el 12 de diciembre por ser día festivo, y del 19 al 31 de diciembre y al día 05 de enero de 2020 por ser el periodo vacacional -ver circular TJA/JDRH/2019 de fecha 05 de diciembre de 2019-).

Por las razones asentadas con antelación, es claro que el presente Juicio, está presentado en tiempo y forma.

**IV.- AUTORIDADES DEMANDADAS:**

- a) **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**, por la resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019, dictada dentro del procedimiento administrativo de origen HACTG/CM/DRQyD/2016. Con domicilio para ser emplazado el ubicado en las oficinas que ocupa la El Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, sito en Calle central y segunda norte S/N, Colonia Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Teléfono [REDACTED]

**V.- HECHOS QUE DAN MOTIVO A LA DEMANDA, LOS CUALES SE MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DE LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA:**

1. Con de fecha 16 de octubre de 2013 se me expidió nombramiento, como SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 2012-2015.

2. Con fecha 18 de julio de 2014 se me expidió nombramiento SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 2012-2015.
3. El suscrito laboró hasta el 30 de septiembre de 2015. Causando baja.
4. Con fecha 02 de octubre de 2015, se le expidió nombramiento como SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL al [REDACTED]
5. Mediante auto de 18 de marzo de 2016, se determinó por parte de la autoridad municipal (contraloría Municipal) que se contaba con elementos para citarme a una audiencia prevista en el artículo 62 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
6. El 08 de abril de 2016, recibí oficio número CM/DRQyD/[REDACTED] 2016 de fecha 29 de marzo de 2016, para comparecer a una audiencia a las 11:00 horas del 12 de abril de 2016.
7. Posteriormente fui notificado NUEVAMENTE para comparecer a la audiencia, mediante oficio número CM/DRQyD/[REDACTED] 2016 de fecha 11 de abril de 2016., PARA COMPARECER Audiencia para celebrarse el día 20 de abril de 2016.
8. La audiencia fue celebrada el día 20 de abril de 2016 a las 10:00 horas. A la que comparecí y presente escrito y pruebas.
9. Con fecha 20 de agosto de 2019, la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, determinó imponerme sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicios público municipal, por un lapso de 3 años. Sin obrar las firmas de dicha comisión ni del acta de cabildo en la que se haya determinado que tiene la facultad para hacerlo.
10. Incongruentemente se precisó que se emitió la resolución el 26 de junio de 2019, suscrita por el Presidente Municipal. (Digo incongruentemente, por cuando se refiere en la misma resolución que la COMISIÓN DE

GOBERNACIÓN con fecha 20 de agosto de 2019 decidió sancionarme, lo que no es materialmente posible). Conste la incongruencia.

11. La resolución de 26 de junio de 2019 dictada por el Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, me fue notificada el día 27 de noviembre de 2019.

12. Inconforme el suscrito con esa determinación de 26 DE JUNIO DE 2019 dictada dentro del procedimiento administrativo número HACTG/CM/DRQyD/2016..

13. Inconforme con la resolución que hice mención en el punto que antecede, es que promuevo este Juicio Contencioso Administrativo de Nulidad.

--El presente asunto está prescrito.

--La aplicación de la sanción de inhabilitación está emitida por autoridad incompetente, por cuanto solo puede dictarse mediante resoluciones jurisdiccionales.

--La aplicación de la sanción de inhabilitación es ilegal e indebida y desproporcionada, por cuanto la conducta que se me reprocha, no ha generado un daño o perjuicio al ayuntamiento el asunto no es estimable en dinero, por lo tanto no era aplicable la sanción de inhabilitación. Conste

#### VI.- PRUEBAS:

- a) DOCUMENTAL.- COPIA de oficio CM/DRyRP/2019 de notificación de fecha 11/11/2019, mediante la cual notifican la resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019 (EXP. HACTG/CM/DRQyD/2016). DOCUMENTO CONSTANTE DE 01 FOJA ÚTIL. Esta prueba se Relaciona con los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta demanda, así como con todo el capítulo de consideraciones previas, el capítulo de suspensión, así como tiene relación con el pliego petitorio contenido en este escrito de demanda. Este documento obra en autos del expediente número HACTG/CM/DRQyD/2016, en ese documento consta que fui notificado el día 27 de noviembre de 2019.

- b) LA DOCUMENTAL: COPIA de la resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019 dictada dentro del procedimiento administrativo (EXP. HACTG/CM/DRQyD/██/2016). DOCUMENTO CONSTANTE DE 21 FOJAS ÚTILES, escritas por una sola cara (8). Esta prueba se Relaciona con los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta demanda, así como con todo el capítulo de consideraciones previas, el capítulo de suspensión, así como tiene relación con el pliego petitorio contenido en este escrito de demanda. Este documento obra en autos del expediente número HACTG/CM/DRQyD/██/2016, lo que ahí puede corroborarse.
- c) LA DOCUMENTAL: COPIA de nombramiento de SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES de fecha 02 de octubre de 2015, de CARLOS ALBERTO THAN ESPONDA (EXP. HACTG/CM/DRQyD/██/2016). DOCUMENTO CONSTANTE DE 01 FOJA ÚTIL, escritos en una sola cara. Esta prueba se Relaciona con los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta demanda, así como con todo el capítulo de consideraciones previas, el capítulo de suspensión, así como tiene relación con el pliego petitorio contenido en este escrito de demanda. Este documento obra en autos del expediente número HACTG/CM/DRQyD/██/2016, lo que ahí puede corroborarse.
- d) DOCUMENTAL.- COPIA de OFICIO de notificación de fecha 29/03/2016, mediante la cual notifican la resolución de fecha 26 de junio de 2019 dentro del EXP. HACTG/CM/DRQyD/██/2016. DOCUMENTO CONSTANTE DE 02 FOJAS ÚTILES. Esta prueba se Relaciona con los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta demanda, así como con todo el capítulo de consideraciones previas, el capítulo de suspensión, así como tiene relación con el pliego petitorio contenido en este escrito de demanda. Este documento obra en autos del expediente número HACTG/CM/DRQyD/██/2016, lo que ahí puede corroborarse.
- e) LA DOCUMENTAL: Copia de escrito por el que COMPARECÍ POR ESCRITO EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2016, EN LA CONCEJALÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (EXP. HACTG/CM/DRQyD/██/2016). DOCUMENTO CONSTANTE DE 17 FOJAS ÚTILES, escritas en una sola cara. Esta prueba se Relaciona con los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta demanda, así como con todo el capítulo de consideraciones previas, el capítulo de suspensión, así como tiene relación con el pliego petitorio contenido en este escrito de demanda. Este documento obra en autos del expediente número HACTG/CM/DRQyD/██/2016, lo que ahí puede corroborarse. COMENTARIO.- La audiencia de Ley se llevó a cabo el 20 de febrero de 2018.

f) **DOCUMENTAL**- Consistente en todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente administrativo número HACTG/CM/DRQyD/2016; el original de dicho documento obran en las oficinas de la PRESIDENCIA MUNICIPAL Y/O CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, para lo cual respetuosamente, solicito que mediante oficio le sea requerida a dicha Institución la entrega y puesta a disposición del citado expediente debidamente foliado, entresellado, y ordenado cronológicamente (de no hacerlo de esta manera, lo objeto desde este momento AD-CAUTELAM) a este Tribunal para que obre como corresponda. Haciendo hincapié, en el sentido que dicho expediente debe contener todos y cada uno de los Tomos que integran los papeles de trabajo QUE HAYA EMITIDO LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RELACIONADO CON ESTE EXPEDIENTE. Así como carpetas, subcarpetas que se hayan aperturado con motivo al procedimiento administrativo número HACTG/CM/DRQyD/2016 y todo lo inherente a las constancias que lo integraron. Lo anterior para los efectos legales a que haya a lugar, de conformidad con lo previsto con el penúltimo y último párrafo del numeral 126 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. Relacionado esta prueba, con todos y cada uno de los hechos y agravios descritos en este ocurso. Esta prueba se Relaciona con los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta demanda, así como con todo el capítulo de consideraciones previas, el capítulo de suspensión, así como el pliego petitorio presentado ante esta autoridad jurisdiccional contenido en este escrito.

**COMENTARIO**.- El expediente administrativo es el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada; dicha documentación será la que corresponda al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución impugnada. El expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar por la autoridad.-

- - - **PEDIMENTO**.- Solicito respetuosamente a esta autoridad jurisdiccional que mediante oficio le sea requerida a la Presidencia Municipal, a través de la Contraloría Municipal la entrega y puesta a disposición del procedimiento administrativo contenido en el expediente número HACTG/CM/DRQyD/2016 a este Tribunal para que obre como corresponda.-

g) LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que me favorezca. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los puntos de esta demanda. Esta prueba se relaciona con los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta demanda, así como con todo el capítulo de consideraciones previas, el capítulo de suspensión, así como el pliego petitorio presentado ante esta autoridad jurisdiccional contenido en este escrito.

h) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado en el expediente administrativo número HACTO/GM/DRQyD/2016 y del recurso 02/2019, y lo que se siga actuando en el presente Juicio Contencioso Administrativo, que favorezca a mis intereses. Prueba que relaciono con todos y cada uno de los puntos de esta demanda. Esta prueba se relaciona con los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta demanda, así como con todo el capítulo de consideraciones previas, el capítulo de suspensión, así como el pliego petitorio presentado ante esta autoridad jurisdiccional contenido en este escrito.

**VII.- CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN Y EXPRESIÓN DE AGRAVIOS QUE ME CAUSAN LA RESOLUCIÓN Y ACTO IMPUGNADO:**

Ahora bien, hechas las precisiones correspondientes, procedo a formular los siguientes:

**CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN.**

**PRIMER CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN.-** ESTE ARGUMENTO DEBE ESTUDIARSE EN ESTA INSTANCIA EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA. CONSTE.

--- JUSTIFICACIÓN.- Los vicios cometidos en LA SENTENCIA de fecha 26 DE JUNIO DE 2019, deben ser atendidos en esta instancia en atención al principio de Litis abierta de conformidad con el último párrafo del artículo 101 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la parte que interesa dispone:



Época: Décima Época  
 Registro: 2004012  
 Instancia: Segunda Sala  
 Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
 Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1  
 Materia(s): Administrativa  
 Tesis: 2a./J. 73/2013 (10a.)  
 Página: 917

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (\*)]. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en

11

11

11

## 11

11

11

11

11

<sup>a</sup>  $\chi^2 = 0.96$ , d.f. = 1,  $p = 0.33$ ;  $G_{adj} = 0.78$ , d.f. = 1,  $p = 0.38$ .

EN ADMITIR  
UBIERAN OF

**"AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.** La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los



**"AUTORIDADES INCOMPETENTES, EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.** Las resoluciones emanadas de una autoridad incompetente, no pueden afectar los intereses jurídicos de aquellos

15

14

***contra quienes se dicten."***

(Época: Quinta Época. Registro: 333136. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LII. Materia(s): Común. Tesis: Página: 2600)

Considerar lo contrario, podría llevar al extremo no permitido de convalidar un acto administrativo que se encuentre viciado, por provenir de una autoridad incompetente, en contravención a las disposiciones consagradas en el artículo 16 constitucional. Se me sujetaría un nuevo procedimiento inoficiosamente, al estar prescrito, lo que iría en detrimento de la pronta administración de justicia en franca violación al artículo 17 constitucional.

En apoyo de lo cual se invoca el siguiente criterio de esta Sala.

***"AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO. La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución***

Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente adminiculado a la garantía

*de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido."*

(Época: Novena Época. Registro: 188678. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, octubre de 2001. Materia(s): Común. Tesis: 2a. CXCVI/2001. Página: 429).



### TERCER CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN.

COMENTARIO.- ESTE ARGUMENTO DEBE ESTUDIARSE EN ESTA INSTANCIA EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA. CONSTE.

JUSTIFICACIÓN.- Los vicios cometidos durante el procedimiento Y EN SENTENCIA DE 26 DE JUNIO DE 2019, deben ser atendidos en esta instancia en atención al principio de Litis abierta de conformidad con el último párrafo del artículo 101 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la parte que interesa dispone:

Época: Décima Época  
Registro: 2004012  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 73/2013 (10a.)  
Página: 917

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (\*)]. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo 10. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, por

excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular.

Contradicción de tesis 528/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

Tesis de jurisprudencia 73/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.

Nota:

La Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 528/2012, por mayoría de tres votos, determinó modificar el criterio sostenido por la propia Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 69/2001, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 223.

*Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil trece, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó desechar por improcedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia 15/2013, de la que fue objeto esta tesis, por falta de legitimación del promovente.*

*Por auto de cinco de agosto de dos mil trece, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó desechar por improcedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia 7/2013, de la que fue objeto esta tesis, por falta de legitimación del promovente.*

*Nota: (\*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 223, con el rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO."*

**FUENTE DE IMPUGNACIÓN.-** VICIOS DE PROCEDIMIENTO QUE AFECTARON MI DEFENSA Y QUE TRASCENDIERON AL RESULTADO DEL FALLO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2019, COMETIDAS en Oficio citatorio número CM/DRQyD/ [REDACTED] /2016 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, girado por el entonces CONTRALOR MUNICIPAL dirigido a mi persona.-----

----- **PRECEPTOS VIOLADOS.-** Artículo 62 fracción I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas, en relación al artículo 10 del Código de Procedimientos Penales aplicado en forma supletoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de la Materia.-----

--- El citatorio número CM/DRQyD/ [REDACTED] 016 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016 girado por el entonces CONTRALOR MUNICIPAL, dirigido a mi persona, está viciado de origen, por cuanto la Dirección de Responsabilidades al emitirlo transgredió el artículo 62 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas, por las siguientes razones:

En ese documento:

- a) No se determinaron con exactitud la falta que se me atribuye. Es decir que al llamarme al procedimiento administrativo número HACTG/CM/DRQyD/[REDACTED]/2016, la autoridad administrativa

21

oficiante, no indicó sus facultades para iniciar, emitir oficio, substanciar y fallar asuntos en materia de recursos federales y seguir procedimientos de responsabilidades a servidores públicos estatales.

- b) En el oficio citatorio emitido por el entonces CONTRALOR MUNICIPAL, no se me hizo saber de manera específica, cuáles son los hechos o conductas que serán materia del procedimiento administrativo, y respecto de que hipótesis normativas que establecen la o las causas de responsabilidad administrativa, pues estaba obligado a adecuar cada una de las causales de responsabilidad que considerara actualizadas, con los hecho o conductas que me atribuye como exfuncionario del ente auditado, (SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS).

CONTRALOR MUNICIPAL, en su oficio citatorio, nunca precisó, nunca puntualizó, ni demostró, ni en el oficio, ni en la substanciación del trámite del procedimiento administrativo HACTG/CM/DRQyD/ [REDACTED]/2016, ni al emitir la resolución de 26 DE JUNIO DE 2019, la intervención de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN o del Ayuntamiento en acta de cabildo.

- c) Tampoco se dice de qué manera el suscrito y en el carácter de exSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, como infringí el artículo 45, toda vez que, no es lo mismo, ser omiso a realizarlo en forma extemporáneo por causas no imputables al suscrito.
- d) También en el oficio citatorio la autoridad es omisa en señalar circunstancias de tiempo, modo, y lugar en que ocurrieron los hechos, pues eso puede acreditarse, solo de la lectura del oficio citatorio CM/DRQyD/ [REDACTED]/2016.

e) Es claro que no se me proporcionaron datos suficientes para mi defensa. El oficio citatorio transgrede los principios de fundamentación y motivación contenidos en los artículos 10 y 68 del Código de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por cuanto esta autoridad administrativa en oficio citatorio, se limita a realizar una simple relación de los datos medios de prueba y pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de los intervinientes o de afirmaciones dogmáticas o fórmulas genéricas o rituales no reemplazan en ningún caso la fundamentación ni la motivación propia (no solo transcribir, es necesario argumentar, explicar, razonar con argumentos propios;

De ahí que se itere que por todas estas omisiones contenidas en el aludido oficio citatorio, se violentó la fracción I del numeral 62 fracción I de la Ley antes invocada, en virtud que en los mismos no se dio a conocer detalladamente los hechos constitutivos de su responsabilidad, limitándose la autoridad a realizar una simple relación de los datos medios de prueba y pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de los intervinientes o de afirmaciones dogmáticas o fórmulas genéricas o rituales no reemplazan en ningún caso la fundamentación ni la motivación. Máxime que en el oficio citatorio no se especificó claramente cuál era la falta administrativa que se me atribuía. Así como fue omisa la autoridad en señalar qué hipótesis normativa encuadraba mi conducta (para cumplir y respetar el principio de taxatividad), al no expresar con precisión los supuestos legales que supuestamente infringí.

Lo que me causa agravios, aunado a la insuficiente motivación, misma que trascendió al resultado del fallo.

## SEGUNDO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN.-

COMENTARIO.- ESTE ARGUMENTO DEBE ESTUDIARSE EN ESTA INSTANCIA EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA. CONSTE.

JUSTIFICACIÓN.- Los vicios cometidos durante el procedimiento Y EN SENTENCIA, deben ser atendidos en esta instancia en atención al principio de litis abierta de conformidad con el último párrafo del artículo 101 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la parte que interesa dispone:

Época: Décima Época  
Registro: 2004012  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 73/2013 (10a.)  
Página: 917

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (\*)). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica la jurisprudencia referida, al considerar que el principio de litis abierta derivado del artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cobra aplicación únicamente cuando la resolución dictada en un procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se traduce en la posibilidad para el actor de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero tal prerrogativa no implica la oportunidad de exhibir en juicio los medios de prueba que, conforme a la ley, debió presentar en el procedimiento administrativo de origen o en el recurso administrativo respectivo para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa, estando en posibilidad legal de hacerlo. De haber sido esa la intención del legislador, así lo habría señalado expresamente, como lo hizo tratándose del recurso previsto en el Código Fiscal de la Federación en el que, por excepción, se concede al contribuyente el derecho de ofrecer las pruebas que por

cualquier motivo no exhibió ante la autoridad fiscalizadora, para procurar la solución de las controversias fiscales en sede administrativa con la mayor celeridad posible y evitar su impugnación en sede jurisdiccional, esto porque la autoridad administrativa puede ejercer cualquiera de las acciones inherentes a sus facultades de comprobación y supervisión, como lo es, entre otras, solicitar información a terceros para compulsarla con la proporcionada por el recurrente o revisar los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados, lo que supone contar con la competencia legal necesaria y los elementos humanos y materiales que son propios de la administración pública. Por tanto, tal prerrogativa no puede entenderse extendida al juicio contencioso administrativo, pues no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en el análisis de pruebas que el particular no presentó en el procedimiento de origen o en el recurso administrativo, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como lo prescribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al indicar que los gobernados deben conservar la documentación indispensable para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y exhibirla cuando sea requerida por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades de comprobación. Estimar lo contrario significaría sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad fiscal y declarar la nulidad de sus actos por causas atribuibles al particular.

*Contradicción de tesis 528/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 13 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.*

*Tesis de jurisprudencia 73/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de abril de dos mil trece.*

**Nota:**

*La Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 528/2012, por mayoría de tres votos, determinó modificar el criterio sostenido por la propia Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 69/2001, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 223.*



25

*Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil trece, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó desechar por improcedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia 15/2013, de la que fue objeto esta tesis, por falta de legitimación del promovente.*

*Por auto de cinco de agosto de dos mil trece, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó desechar por improcedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia 7/2013, de la que fue objeto esta tesis, por falta de legitimación del promovente.*

*Nota: (\*) Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2007, página 223, con el rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LAS PRUEBAS DEBEN ADMITIRSE EN EL JUICIO Y VALORARSE EN LA SENTENCIA, AUN CUANDO NO SE HUBIERAN OFRECIDO EN EL PROCEDIMIENTO."*

Este asunto está prescrito al tenor de lo dispuesto en la fracción I y II del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría Municipal.

EL ASUNTO TAL Y COMO LO CONFESÓ EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA FOJA 19 DE LA RESOLUCIÓN, EN EL APARTADO, SIGUIENTE:

**VII.- EL MONTO DE BENEFICIO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

De las constancias procesales se desprende que la conducta que se reprocha no ha generado un daño o perjuicio al H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; pues con la omisión en que incurrió el servidor Público sujeto a procedimiento no es estimable en dinero. -

ESTE ASUNTO NO HA GENERAL UN DAÑO O PERJUICIO AL H. AYUNTAMIENTO, Y A QUE NO ES ESTIMABLE EN DINERO. POR LO TANTO SE UBICA EN LA FRACCIÓN I DE UN AÑO, NO OBSTANTE QUE TAMBIÉN YA SE ACTUALIZÓ LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.



**1ª forma de prescripción.-** Si el suscrito causó baja el 30 de septiembre de 2015, y la resolución de 26 de junio de 2019, fue notificada el día 27 de noviembre de 2019, es inconcuso que han sido superado los plazos previstos en exceso contenidos en las fracciones I y II del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.

**2ª forma de prescripción.-** Si el suscrito realizó entrega del documento el día 11 de noviembre de 2015, y la resolución de 26 de junio de 2019, fue notificada el día 27 de noviembre de 2019 es innegable que han sido superado los plazos previstos en exceso contenidos en las fracciones I y II del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. En caso que la desestime, le pido estudiar, la siguiente:

**3ª forma de prescripción.-** El oficio citatorio HACTG/CM/DRQYD/ /2016, fue notificado el día 08 DE ABRIL DE 2016, habiendo otro diverso citatorio CM/DRQyD/ /2016 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, por lo que si el inicio del procedimiento administrativo lo fue el día 18 DE MARZO DE 2016; por lo tanto, es innegable que han sido superado los plazos previstos en exceso contenidos en las fracciones I y II del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. Es aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia:

**Época: Novena Época**

**Registro: 179465**

**Instancia: Segunda Sala**

**Tipo de Tesis: Jurisprudencia**

**Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta**

**Tomo XXI, Enero de 2005**

**Materia(s): Administrativa**

**Tesis: 2a./J. 203/2004**

Página: 596

**RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUPTO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL CÁLCULO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.** De los artículos 78 y 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no las actuaciones siguientes, y que una vez interrumpido aquél debe computarse de nueva cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción con conocimiento del servidor público, lo que acontece con la citación que se le hace para la audiencia, aun cuando en el mencionado artículo 78 no se establece expresamente, puesto que del análisis de las etapas que conforman tal procedimiento se advierte que en caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos suficientes para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra u otras audiencias, lo que produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una

28

forma de extinción de las facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del servidor público deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerlo expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento sancionador que debe agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de la mencionada interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. En consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la citación para audiencia hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por lo que a partir de que surte efectos la notificación de la mencionada citación inicia nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida, sobre todo considerando que si la referencia al inicio del procedimiento sirvió para determinar el momento de interrupción del plazo de prescripción, aquella puede ser utilizada para establecer el momento a partir del cual se vuelve a computar el citado plazo, sin que esto deje en estado

*de indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y recabar elementos probatorios.*

*Contradicción de tesis 130/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Quinto y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa.*

*Tesis de jurisprudencia 203/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro.*

Los artículos 62 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas, y los relacionados a la jurisprudencia relacionados con el 78 y 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se advierte que el punto jurídico es exactamente igual al caso a resolver que en la jurisprudencia (ver artículo 62 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas y el numeral 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así como confrontar artículo último párrafo del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas y el último párrafo del artículo 78 de la Ley de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos).

De lo expuesto con antelación se advierte en primer lugar que la jurisprudencia es aplicable AL CASO CONCRETO A ESTUDIO POR ANALOGÍA. Por lo tanto:

A luz del artículo 75 último párrafo de la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Chiapas, la prescripción se interrumpió con el inicio del procedimiento, es decir el 18 DE MARZO DE 2016. Y en términos de la Jurisprudencia aplicable por analogía sustancial EL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN SE INICIÓ NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, la que ocurrió el día 08 Y 11 DE ABRIL DE 2016.

De ahí que si la notificación de la citación para la audiencia, ocurrió el día 08 Y 11 DE ABRIL DE 2016, luego entonces esa notificación surtió efectos el mismo día, de conformidad con lo que establece el artículo 58 del Código de Procedimientos Penales que es aplicable en forma supletoria por así disponerlo el artículo 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.

**Época: Novena Época**

**Registro: 173536**

**Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito**

**Tipo de Tesis: Aislada**

**Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta**

**Tomo XXV, Enero de 2007**

**Materia(s): Penal**  
**Tesis: XX.2o.62 P**  
**Página: 2278**

**NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN SUS EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIAPAS).** El artículo 58 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas señala que los términos judiciales son improrrogables y empezarán a computarse al día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación y no se incluirán en ellos los sábados, domingos ni los días de fiesta nacional, pero cuando se trate del plazo constitucional, se contará de momento a momento. No obstante lo anterior, en dicho numeral no se indica de manera expresa cuándo surten efectos las determinaciones a notificar; sin embargo, de la interpretación gramatical de su enunciado narrativo, en torno a que aquéllos comenzarán a computarse a partir del día siguiente al en que se hubiere hecho la comunicación de mérito, se concluye que tales actuaciones cobran eficacia legal en la misma fecha en que son puestas en conocimiento de los interesados, por lo que a partir de ese momento los sujeta jurídicamente para la debida observancia de los plazos relativos a cualquier promoción o instancia impugnativa que deseen hacer valer, incluido el juicio de garantías, en caso de ser procedente.

32

31

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.**

**Amparo en revisión 105/2005. 16 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretario: Salomón Zenteno Urbina.**

**Época: Décima Época**

**Registro: 2007514**

**Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito**

**Tipo de Tesis: Jurisprudencia**

**Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación**

**Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III**

**Materia(s): Penal**

**Tesis: XX.2o. J/1 (10a.)**

**Página: 2247**

**NOTIFICACIONES CONFORME AL ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, EN ABROGACIÓN PAULATINA. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN. El citado artículo (en abrogación paulatina conforme el nuevo código entre en vigor sucesiva y territorialmente por regiones), señala que los términos judiciales son improrrogables y empezarán a contar al día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación y no se incluirán en ellos los sábados, domingos ni los días de fiesta nacional, pero cuando se trate del término**

constitucional, se contará de momento a momento. Sin embargo, no indica expresamente a partir de cuándo surten efectos las notificaciones realizadas conforme al propio artículo -ya sea en asuntos penales o en aplicación supletoria en otros procedimientos-; no obstante, de la interpretación gramatical de su enunciado narrativo, en torno a que dichos términos comenzarán a computarse a partir del día siguiente al en que se hubiere hecho la comunicación de mérito, se concluye que esas actuaciones surten efectos el mismo día en que se practican; es decir, en la fecha en que son puestas en conocimiento de los interesados, por lo que a partir de ese momento, los sujeta jurídicamente para la debida observancia de los plazos relativos a cualquier promoción o instancia impugnativa que deseen hacer valer, incluido el juicio de amparo, en caso de ser procedente.

#### **SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.**

*Amparo en revisión 105/2005. 16 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretario: Salomón Zenteno Urbina.*

*Amparo directo 677/2008. 5 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Alonso López Murillo. Secretario: Salomón Zenteno Urbina.*



**Amparo en revisión (improcedencia) 312/2012. 13 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez.**

**Amparo en revisión 66/2014. 4 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretaria: María Mayela Burguete Brindis.**

**Amparo en revisión 128/2014. 15 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Sánchez Montalvo. Secretario: Luis Alfredo Gómez Canchola.**

**Nota: Por ejecutoria del 12 de septiembre de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la contradicción de tesis 332/2015 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir las jurisprudencias P./J. 10/2017 (10a.) y P./J. 11/2017 (10a.) que resuelven el mismo problema jurídico.**

**Esta tesis se publicó el viernes 26 de septiembre de 2014 a las 09:45 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.**

Por lo tanto, el cómputo de la prescripción se reinició el día 08 Y 11 DE ABRIL DE 2016, por lo que del 08 Y 11 DE ABRIL DE 2016 al 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 que fue notificada

la resolución mediante oficio citatorio CM/DRyRP/ [REDACTED] 2019, han transcurrido 3 años, 7 meses y 16 días aproximadamente, por lo tanto están superados los plazos contenidos en las fracciones I y II del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades, por lo tanto este asunto contrario a lo manifestado por la PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, ESTÁ A TODAS LUCES PRESCRITO.

Es decir que en el presente asunto, las facultades del SUPERIOR JERÁRQUICO (AYUNTAMIENTO POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE MUNICIPIAL) Y DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, para imponerme sanción que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas, en virtud de que han transcurrido en exceso los plazos previstos en las fracciones I y II de I artículo 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

**TERCERO CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN.-** La aplicación de la sanción de inhabilitación temporal es ilegal, por los siguientes razonamientos:

La autoridad municipal al dictar la resolución de 26 de junio de 2019, incurrió en indebida fundamentación, para sostener la legalidad de la aplicación de la sanción.

Es ilegal, por los siguientes razones:

36

EN PRIMER LUGARO, PORQUE EL ASUNTO TAL Y COMO LO CONFESÓ EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA FOJA 19 DE LA RESOLUCIÓN, EN EL APARTADO, SIGUIENTE:

VII.- EL MONTO DE BENEFICIO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

De las constancias procesales se desprende que la conducta que se reprocha no ha generado un daño o perjuicio al H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; pues con la omisión en que incurrió el servidor Público sujeto a procedimiento no es estimable en dinero. -

ESTE ASUNTO NO HA GENERAL UN DAÑO O PERJUICIO AL H. AYUNTAMIENTO, Y A QUE NO ES ESTIMABLE EN DINERO. POR LO TANTO SE UBICA EN LA FRACCIÓN I DE UN AÑO, NO OBSTANTE QUE TAMBIÉN YA SE ACTUALIZÓ LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

EN SEGUNDO LUGAR, Por cuanto el último párrafo del artículo 51 de la Ley de Responsabilidades establece, relacionado con la fracción VI establecen:

ARTÍCULO 51.- LAS SANCIONES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONSISTIRAN EN:  
I.- APERCIBIMIENTO PRIVADO O PÚBLICO;  
II.- AMONESTACIÓN PRIVADA O PÚBLICA;  
III.- SUSPENSIÓN;  
IV.- DESTITUCIÓN DEL PUESTO;  
V.- SANCION ECONÓMICA; E  
VI.- INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO.

CUANDO LA INHABILITACIÓN SE IMPONGA COMO CONSECUENCIA DE UN ACTO U OMISIÓN QUE IMPLIQUE LUCRO O CAUSE DAÑOS Y PERJUICIOS,

37

SERA DE SEIS MESES A TRES AÑOS SI EL MONTO DE AQUELLOS NO EXCEDE DE CIENTO VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL ESTADO Y DE TRES AÑOS A DIEZ AÑOS SI EXCEDE DE DICHO LIMITE.

La imposición de seis meses a tres años, se impondrá como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o cuase daños y perjuicios. Lo que expresamente confesó el presidente municipal, que no había lucro, ni era estimable en dinero, ni que se había causado daños y perjuicios, por lo tanto la aplicación es indebida, por lo tanto, ilegal, por lo que debe nulificarse al violentarse las reglas jurídicas de la debida fundamentación que todo acto debe contener.

EN TERCER LUGAR, el artículo 54, fracción V del aludido ordenamiento, establece:

- ARTICULO 54.-** PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 51, SE OBSERVARAN LAS SIGUIENTES REGLAS:
- I.- EL APERCIBIMIENTO, LA AMONESTACION Y LA SUSPENSION DEL EMPLEO, CARGO O COMISION POR UN PERIODO NO MENOR DE TRES DIAS NI MAYOR DE TRES MESES, SERAN APLICABLES POR EL SUPERIOR JERARQUICO;
  - II.- LA DESTITUCION DEL EMPLEO, CARGO O COMISION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, SE DEMANDARA POR EL SUPERIOR JERARQUICO DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS CONSEQUENTES CON LA NATURALEZA DE LA RELACION Y EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS;
  - III.- LA SUSPENSION DEL EMPLEO, CARGO O COMISION DURANTE EL PERIODO AL QUE SE REFIERE LA FRACCION I, Y LA DESTITUCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CONFIANZA, SE APLICARAN POR EL SUPERIOR JERARQUICO;  
(REF. PUBLICADA EN EL P.O. No 151 TERCERA SECC DE FECHA 18 DE MARZO DE 2009)
  - IV. LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PROMOVERÁ LOS PROCEDIMIENTOS A QUE HACEN REFERENCIA LAS FRACCIONES II Y III, DEMANDANDO LA DESTITUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE O PROCEEDIENDO A LA SUSPENSIÓN DE ÉSTE CUANDO EL SUPERIOR JERÁRQUICO NO LO HAGA. EN ESTE CASO, LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DESAHOGARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EXHIBIRÁ LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL SUPERIOR JERÁRQUICO;

V.- LA INHABILITACION PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, SERA APLICABLE POR RESOLUCION JURISDICCIONAL, QUE DICTARA EL ORGANO QUE CORRESPONDA SEGUN LAS LEYES APLICABLES; Y  
(REF. PUBLICADA EN EL P.O. No 151 TERCERA SECC. DE FECHA 18 DE MARZO DE 2009)

VI. LAS SANCIONES ECONÓMICAS SERÁN APLICADAS POR EL SUPERIOR JERÁRQUICO CUANDO NO EXCEDAN DE UN MONTO EQUIVALENTE A CIENTO VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL ESTADO, Y POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CUANDO SEAN SUPERIORES A ESTA CANTIDAD.

TRATÁNDOSE DE PRESIDENTES MUNICIPALES, REGIDORES Y SINDICOS, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR, CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO. RESPECTO A LOS DEMAS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, LAS SANCIONES Y ACCIONES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES DE ESTE ARTICULO, CORRESPONDE APLICARLAS Y EJERCITARLAS A LOS AYUNTAMIENTOS POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES ECONOMICAS RESPECTIVAS.

(REF. PUBLICADA EN EL P.O. No 151 TERCERA SECC. DE FECHA 18 DE MARZO DE 2009)

El precepto indica claramente que la inhabilitación, será aplicable por resolución jurisdiccional, y la resolución emitida por el Presidente Municipal de fecha 26 de junio de 2019, no cumple, pues, él es una autoridad municipal, no jurisdiccional, por lo tanto, es otra razón por la cual es ilegal.

Aunado a que la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte. Apoya lo anterior, las tesis

emitidas por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invocan:

**"AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.** La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en

*la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente administrado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca hubiera existido. (Época: Novena Época. Registro: 188678. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis:*

Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, octubre de 2001. Materia(s): Común. Tesis: 2a. CXCVI/2001. Página: 429)

**"AUTORIDADES INCOMPETENTES, EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES DE LAS** Las resoluciones emanadas de una autoridad incompetente, no pueden afectar los intereses jurídicos de aquellos contra quienes se dicten."

(Época: Quinta Época. Registro: 333136. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LII. Materia(s): Común. Tesis: Página: 2600)

Considerar lo contrario, podría llevar al extremo no permitido de convalidar un acto administrativo que se encuentre viciado, por provenir de una autoridad incompetente, en contravención a las disposiciones consagradas en el artículo 16 constitucional. Se me sujetaría un nuevo procedimiento inoficiosamente, al estar prescrito, lo que iría en detrimento de la pronta administración de justicia en franca violación al artículo 17 constitucional.



42

En apoyo de lo cual se invoca el siguiente criterio de esta Sala.

**"AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.** La garantía que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denota que la competencia de las autoridades es uno de los elementos esenciales del acto administrativo. Entre sus características destacan las siguientes: a) requiere siempre de un texto expreso para poder existir; b) su ejercicio es obligatorio para el órgano al cual se atribuye y c) participa de la misma naturaleza de los actos jurídicos y abstractos, en el sentido de que al ser creada la esfera de competencia, se refiere a un número indeterminado o indeterminable de casos y su ejercicio es permanente porque no se extingue en cada hipótesis. Ahora bien, estas características encuentran su fundamento en el principio de legalidad, según el cual, las autoridades del

*Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones. Este principio se encuentra íntimamente administrado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dos aspectos: el formal que exige a la autoridad la invocación de los preceptos en que funde su competencia al emitir el acto y el material que exige que los hechos encuadren en las hipótesis previstas en las normas. En este sentido, como la competencia de la autoridad es un requisito esencial para la validez jurídica del acto, si éste es emitido por una autoridad cuyas facultades no encuadran en las hipótesis previstas en las normas que fundaron su decisión, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca*

2/4

43

*hubiera existido."*

(Época: Novena Época. Registro: 188678. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, octubre de 2001. Materia(s): Común. Tesis: 2a. CXCVI/2001. Página: 429).

**Sin dejar de observar, que también, la imposición de inhabilitarme por tres años, es excesiva y desproporcionada, conste.**

**VIII.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO:**

- a) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que desconozco si existe tercero interesado.

**IX.- SOLICITUD CON RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN O ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNADO:**

La nulidad de la resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019, por las razones que se explicitan en esta demanda.

**DERECHO.**

Son aplicables los artículos en cumplimiento a lo ordenado por los artículos artículos 1, 3, 6, 101, 102, 103 primer y antepenúltimo párrafo, 104 fracciones I y II inciso "A", 105, 109 fracciones I y II, 115, 125 párrafo primero, fracción I, inciso a), 126, 127 y demás aplicables de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas

16

# PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

La presente demanda debe ser admitida a trámite, de conformidad con la parte in fine del primer párrafo del numeral 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.

## ----- CAPITULO DE LA SUSPENSIÓN.-----

Pido que con motivo a la interposición del de este juicio SE SUSPENDA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA ASÍ COMO SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS LEGALES, en virtud de que no se causan perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Con esta medida cautelear se debe mantener paralizada o detenida la actuación de la autoridad responsable durante todo el tiempo que dure la sustanciación de este Juicio Contencioso Administrativo de Nulidad y hasta en tanto se resuelva en definitiva este asunto sometido a su consideración. Se resuelva este pedimento, cumpliendo con los principios de fundamentación, motivación y congruente con los puntos solicitados.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 131, 132 y 133 y relativos de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, solicito la suspensión provisional de los actos reclamados y definitiva toda vez que causan al suscrito daños de imposible reparación, y no se causan perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de la ejecución de los actos reclamados. Lo anterior, en virtud de que la medida solicitada tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del suscrito resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. De igual manera, reitero y solicito RESPETUOSAMENTE que con motivo a la interposición de esta demanda de nulidad, se suspendan los efectos y consecuencias de la ejecución del acto impugnado en esta demanda de nulidad: respecto de la resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019, dictada por el Titular de PRESIDENCIA MUNICIPAL Y/O CONTRALORÍA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, mediante el cual decidió modificar la sanción económica impuesta en resolución de 06/12/2018 y confirmar la sanción de inhabilitación precisada en esta última resolución.

Me causa agravios las sanciones impuestas, porque en primer lugar, estamos ante una autoridad carente de competencia y en segundo lugar, porque el asunto está prescrito y porque lesiona mi bolsillo, afecta mi esfera jurídica y con el registro de la sanción en el padrón de servidores públicos sancionados afecta mi honor y dignidad.

Con esta medida cautelar, se debe de ordenar al Titular de Dirección de Responsabilidades, que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación de esta demanda de nulidad, hasta en tanto se resuelva en definitiva este asunto sometido a su consideración.

Solicito la suspensión, PUES EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES NO HA CAUSADO FIRMEZA, en relación con lo estatuido en el reglamento interior de esta Secretaría de la Función pública en la fracción XV del artículo 45, en el sentido que solo se ejecutarán **RESOLUCIONES FIRMES**. Lo anterior, en virtud de que la medida solicitada tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del suscrito resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. La sanción económica debe ser suspendida en atención: 1.- Al principio PRO HOMINE y/o PRO PERSONA, contenido en el artículo con fundamento en el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el principio pro homine y "...Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia..." "...Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...". 2.- Aunado a que en este caso operan los principios de APARIENCIA DEL BUEN DERECHO y EL PELIGRO EN LA DEMORA.

Resultando aplicable por analogía la siguiente Jurisprudencia por contradicción de Tesis, emanada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y texto, se transcriben a continuación:

*"Novena Época  
Registro: 177160  
Instancia: Segunda Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXII, Septiembre de 2005,  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./I. 112/2005  
Página: 493"*

*"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL. La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal en el cargo del servidor público no encuentra el obstáculo del interés público y social previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva."*

*"Contradicción de tesis 122/2005-SS. Entre las sustentadas por el Noveno y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García."*

De igual manera, solicito el otorgamiento de la suspensión de los actos y respecto de su ejecución consecuencias y efectos legales, que a continuación se precisan:

1. Se suspenda la ejecución de la resolución impugnada, sus consecuencias y efectos legales que afectan mi esfera jurídica como gobernado (Honor, dignidad, etc.), cumpliendo con lo mandado en la fracción IV del artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.
2. La suspensión de la Ejecución de la SANCIÓN ECONÓMICA consecuencias y efectos legales, por las razones expresadas en párrafos que anteceden y en atención al artículo 1º Constitucional, en atención al

principio contenido en dicho precepto "interpretación conforme" (interpretación más favorable) que obliga a las **"Todas las autoridades del Estado Mexicano"**, que mediante la interpretación de normas, apliquen las más favorable, por ello solicito que este ejercicio se realice en mi caso concreto sometido a su consideración y se interprete el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Principio de ejecución de sentencia firme) en relación con: a).- el artículo 51 fracciones V y VI, 54 fracción V y VI, 53; y b).- Con el numeral 69 y concatenado con la fracción XV del precepto 45 del Reglamento de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública. **Máxime que el presente asunto fue dictado por una autoridad incompetente que aplicó normatividad federal sin justificar competencia concurrente e intervino en una auditoría federal, recursos federales y pretende aplicar responsabilidades a servidores públicos estatales. Aunado a que el asunto está prescrito, (no se puede interrumpir la prescripción si lo actuado deviene de una autoridad incompetente).** C).- Finalmente expongo que el Artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas, en relación a los artículos 10 y 68 del Código de Procedimientos Penales aplicado en forma supletoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de la Materia. Impedimento legal del Director para ejecutar la Sanción Económica que no haya adquirido firmeza, previsto en la fracción XV del artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Con los argumentos vertidos con antelación cumplo con lo mandatado en la fracción IV del artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.

3. La suspensión de la Ejecución de la SANCIÓN DE INHABILITACIÓN, sus consecuencias y efectos legales, por las razones expresadas en párrafos que anteceden y en atención al artículo 1º Constitucional, en atención al principio contenido en dicho precepto "interpretación conforme" (interpretación más favorable) que obliga a las **"Todas las autoridades del Estado Mexicano"**, que mediante la interpretación de normas, apliquen las más favorable, por ello solicito que este ejercicio se realice en mi caso concreto sometido a su consideración y se interprete el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (Principio de ejecución de sentencia firme) en relación con el artículo 51 fracciones VI, 54 fracción V; y. **La inhabilitación solo puede ser ejecutada cuando la resolución este firme por una**

resolución jurisdiccional, ver artículo 54 fracción y en relación con la fracción XII del artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos aplicada a contrario sensu. Aunado a que cualquier imposición de sanción económica fundada en el artículo 53, resulta contrario a la constitución, pues ese precepto de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas, contiene parámetros de multa fija que impiden su individualización, de ahí que debe inaplicarse a través del control difuso, así como sus efectos y consecuencias legales pretendidas por la autoridad administrativa. Con los argumentos vertidos con antelación cumpla con lo mandado en la fracción IV del artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas

4. La suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción económica y de inhabilitación mencionada en el punto que antecede, al portal del padrón de servidores públicos sancionados. Este punto, no está sujeto a garantía alguna. (ver criterio jurisprudencial)

Resultando aplicable por analogía la siguiente Jurisprudencia por contradicción de Tesis, emanada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y texto, se transcriben a continuación:

*"Novena Época*

*Registro: 177160*

*Instancia: Segunda Sala*

*Jurisprudencia*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*XXII, Septiembre de 2005,*

*Materia(s): Administrativa*

*Tesis: 2a./J. 112/2005*

*Página: 493"*

**"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS ACTOS DE REGISTRO O INSCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN TEMPORAL.** La posibilidad de dictar medidas cautelares aptas para evitar la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, constituye una de las manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución Política de los



50

*Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tales medidas tienden a evitar, por una parte, que la afectación en la esfera jurídica del particular resulte irreparable y, por otra, que el propio proceso principal instituido para la defensa de los derechos sea inútil a esos efectos. En ese sentido, el otorgamiento de la suspensión de los actos de registro o inscripción de la sanción de inhabilitación temporal en el cargo del servidor público no encuentra el obstáculo del interés público y social previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que dicho registro definitivo o inscripción puede afectar irreversiblemente el derecho del gobernado a su propia imagen, en el ámbito personal y profesional, lo que es de mayor peso que el interés consistente en registrar, para efectos administrativos, transitorios y meramente preventivos, la sanción temporal impuesta, máxime que ésta se halla cuestionada jurídicamente a través del juicio de garantías y que, en todo caso, el registro para tales fines puede esperar a la firmeza de la resolución sancionatoria respectiva."*

*"Contradicción de tesis 122/2005-SS. Entre las sustentadas por el Noveno y el Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García."*

Con los argumentos vertidos con antelación cumpla con lo mandado en la fracción IV del artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas

5. Con fundamento en la fracción XII del artículo 37 de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, en relación al numeral 26 de su reglamento, pido la **suspensión contra los actos de que se ponga a disposición en forma permanente del Portal de Transparencia y el Derechos a la Información Pública** hasta en tanto se resuelva en definitiva este asunto sometido a su consideración. Lo anterior, porque dichas disposiciones establecen que esto se hará una vez que las resoluciones hayan causado estado serán publicadas. Con los argumentos vertidos con antelación cumpla con lo mandado en la fracción IV del artículo 131 de la Ley de Procedimientos

51

# Administrativos para el Estado de Chiapas.

Pido respetuosamente que en atención a los principios de exhaustividad y congruencia sea dictado por el MAGISTRADO PONENTE del asunto, al tenor de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, en atención al principio de especialidad de la materia. Así como que al pronunciarse sobre la SUSPENSIÓN, se atiendan los 5 puntos, y sobre ellos se exprese en forma particular. Conste en autos el pedimento.

Sentado lo anterior, y una vez sentado que a juicio del suscrito se reúnen los requisitos para la suspensión, se pide a Vuestra Señoría que funde su apreciación basada en LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO prevista en el inciso C), fracción VI del artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas e invoco como hecho notorio, las constancias, las resoluciones dictadas:

-----VER ANTECEDENTE 1.- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 94-A/2015, RADICADO EN LA PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL, ZONA 01, TUXTLA, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, RELACIONADO CON EL RECURSO DE REVISIÓN TC/S/RR, 2016 FALLADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL-  
P.A. HACTG/CM/DRQyD/2016-.

-----VER ANTECEDENTE 2.- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 106-A/2015, RADICADO EN LA SEGUNDA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL, ZONA 01, TUXTLA, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.  
P.A. HACTG/CM/DRQyD/2016-).

y declare procedente la medida cautelar solicitada, pues el presente asunto reúnen los dos extremos que hay que llenar para obtener la medida suspensiva cautelar:

- 1) Apariencia de buen derecho "fumus boni iuris".
- 2) Peligro en la demora "periculum in mora".

*Jurisprudencia*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tomo : XXV, Abril de 2007*

*Testis: I.15o.A. 1/3*

52

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EL EXAMEN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, ES PREVIO AL ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. La suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, de carácter instrumental, para preservar la materia del propio juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías alegada. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa y, eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviado (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II), o no se causaran al agraviado daños de difícil reparación (fracción III); esto es, sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no fuera de difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos establecidos en el citado artículo 124.

53

Instancia: Pleno  
Jurisprudencia  
Tomo : III, Abril de 1996  
Tesis: P./J. 15/96  
Página: 16

SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE-ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensiva deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.

Por otro lado según Piero Calamandrei, en su obra titulada Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, por cuanto se refiere al primer elemento señalado, el conocimiento cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidad y de verosimilitud, porque declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal (juicio de fondo o principal) y en sede cautelar (suspensión) basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, dice, basta que según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho con sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar y expresa este tratadista: "El resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene pues en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis, solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis corresponde a la realidad."

Soporto este argumento de defensa, con DOCTRINA, que es del tenor siguiente:

Diversos autores concuerdan en la asimilación de la suspensión del acto reclamado, con las medidas cautelares, entre ellos Eduardo Pañares, quien en el Diccionario Teórico y Práctico del Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, S.A. México, 1982, página 252, expone:

"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Su naturaleza jurídica. La suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que puede decretarse mientras no se falla en definitiva y por sentencia firme el amparo. Tiene por objeto:

a) Mantener viva la materia del juicio o sea el acto reclamado, evitando que llegue a consumarse de modo irreparable y sea necesario decretar el sobreseimiento del amparo;

**b) Impedir que el quejoso siga sufriendo los daños y perjuicios causados por el acto reclamado, hasta el punto de hacerlo irreparable.**

Equivale en el juicio de amparo a las medidas cautelares, y entre éstas a las providencias precautorias que se llevan a cabo en los juicios del orden común.

El doctor Juventino V. Castro y Castro, en su obra La Suspensión del Acto Reclamado en el Amparo, Editorial Porrúa, S.A. México, 1991, página 63, proporciona la siguiente definición:

"La suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental para preservar la materia del proceso, y cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del

cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta positiva o negativa de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional."

En conclusión, si no se me concede la suspensión en los términos requeridos, se me afecta de manera irreparable mi esfera jurídica, ya que no podrá ser resarcida o reparada, ni aún con el dictado de un sentencia favorable, pues ya que la autoridad, ante la nulidad del oficio comentado en párrafos que anteceden, puede considerarme infractor e imponerme en cualquier momento una sanción, cuando los hechos imputados son para el Extitular de la Secretaría del Medio Ambiente E historia Natural como servidor público, pues ante la nulidad del oficio al tenor de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 6, dispone: *"...En caso de que el acto se hubiere consumado, o bien, sea de imposible de hecho de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor que la hubiere emitido u ordenado..."*.

Por ende, no puede negarse la suspensión contra los actos ejecutados estimando que es acto consumado. En cambio, debe estimarse que es un acto de tracto sucesivo porque no se agota en la orden respectiva, sino que se va realizando a través del tiempo y por ello admite la medida cautelar, de conformidad con la tesis jurisprudencial consultable en la página 33 de la octava parte del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:

**"Acto de tracto sucesivo.** Tratándose de hechos continuos, procede conceder la suspensión en los términos de la ley, para el efecto de que aquéllos no sigan verificándose y no queden irreparablemente consumados los actos que se reclaman".

## PRUEBAS OFRECIDAS EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN SOLICITADA

Para acreditar el interés jurídico de mi mandante, la existencia de los actos reclamados y la procedencia de éste Juicio de Nulidad, de nuestra parte ofrecemos como pruebas las siguientes:

Las pruebas ofrecidas son las mismas que fueron exhibidas en el CAPÍTULO DE PRUEBAS del Juicio Principal, por lo tanto exhibo en este acto COPIAS SIMPLES DE DICHAS DOCUMENTALES, OFRECIENDO ADEMÁS EN ESTE ACTO, TAMBIÉN, EN FORMA ADICIONAL ESTAS DOS PROBANZAS:

- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que a los intereses del quejoso favorezcan.
- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que a los intereses del quejoso favorezcan.

Por lo expuesto y fundado, A USTED C. Magistrado Ponente, atentamente pido en RELACIÓN AL CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN LO SIGUIENTE:

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado con el presente escrito y solicitando sea acordada favorablemente la suspensión en los términos solicitados. En virtud de que este pedimento se hace desde el escrito de inicio de demanda, por economía procesal, bastará con una copia para las partes, que surtirá efectos para el Juicio Principal y el Cuadernillo incidental, a efecto de evitar hacer más voluminoso y complicado este asunto, con lo que se da cumplimiento a la fracción I del artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas y una más para la carpeta de suspensión. Sea fallada en forma fundada, motivada y congruente con los pedimentos realizados.

**SEGUNDO.-** Dar curso a la Suspensión solicitada por la quejosa, concediéndole de inmediato la suspensión provisional solicitada y en su oportunidad, la definitiva de los actos reclamados.

**TERCERO.-** Toda vez que ofrecí en el Juicio Principal diversas documentales en originales, en copias certificadas y simples, le solicito respetuosamente que las mismas se compulsen o certifiquen para que obren en el expediente incidental de suspensión que se apertura con motivo a mi pedimento. Lo anterior para que al resolver el asunto en lo atinente a la suspensión, dichas documentales tengan valor probatorio.

**CUARTO.-** Se tengan por ofrecidas adicionalmente a las documentales la presunción legal y humana y la instrumental de actuaciones en todo lo que me favorezca. Así como las que presenté en vía de prueba ante la autoridad administrativa.

**QUINTO.-** Previo los trámites de ley, pronunciar Sentencia interlocutoria, se me conceda la suspensión y sin garantía, puesto que no hay daños, ni tercero perjudicados.

57

56

Por lo antes expuesto, a Ustedes CC. MAGISTRADOS, atentamente pido EN RELACIÓN AL JUICIO PRINCIPAL se sirvan:

**PRIMERO.-** Tenerme por presentado en tiempo y forma, en los términos de este escrito de demanda de nulidad, y anexos, que acompaño en copias simples y que se emplace a juicio y corra traslado de la demanda de nulidad a las autoridades demandadas.

**SEGUNDO.-** Tener por ofrecidas todas y cada una de las pruebas que se ofrecen en el capítulo de pruebas de este escrito y en el momento procesal oportuno admitirlas y desahogarlas conforme a su propia naturaleza.

**TERCERO.-** Decretar la suspensión y que en el momento procesal oportuno, queden sin efecto las resoluciones impugnadas en esta demanda de nulidad, en razón que se satisfacen los supuestos que se señalan en esta demanda de nulidad a que se refiere la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.

**CUARTO.-** Que mi representada tiene el derecho a tener una resolución justa y debidamente fundada y motivada.

**QUINTO.-** Se hace hincapié a esta autoridad jurisdiccional que la demanda de nulidad presentada, debe ser estudiada de manera íntegra, completa y no solo avocarse atender al apartado de conceptos de impugnación, son cualquier parte de ella donde se advierta la exposición de motivos esenciales de la causa de pedir, así como sus anexos, tal y como se precisan en los siguientes criterios el primero, cuyos datos son correspondientes a la Novena Época, Registro: 176329,



Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J.,183/2005, Página: 778, de rubro: **"...DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA..."**, así como la siguiente jurisprudencia, cuyos datos son relativos a la Novena Época, Registro: 166683, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Administrativa Tesis: I.7o.A. J/46, Página: 1342, el rubro reza: **DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU EXAMEN NO SÓLO DEBE ATENDER A SU APARTADO DE CONCEPTOS DE ANULACIÓN, SINO A CUALQUIER PARTE DE ELLA DONDE SE ADVIERTA LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ESENCIALES DE LA CAUSA DE PEDIR.**

**SEXTO.-** Solicito respetuosamente a esta autoridad jurisdiccional que mediante oficio le sea requerida al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS la entrega y puesta a disposición del expediente administrativo que dio origen a este Juicio, expediente HACTG/CM/DRQyD/██/2016. Lo anterior para que obre como legalmente corresponda.

**SÉPTIMO.-** Es pertinente precisar que los conceptos de impugnación plasmados en esta demanda están estrechamente vinculados al capítulo de consideraciones previas expuestas en este documento, al capítulo de pruebas. Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales y administrativos a que hubiere a lugar, con fines de estudio al resolver el presente asunto en el momento procesal oportuno.

**OCTAVO.-** Solicito a este órgano jurisdiccional tome en consideración MI OPOSICIÓN para que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la resolución que se emita en el presente asunto, al tenor de lo que prescribe la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública en el Estado de Chiapas.

**NOVENO.-** Se me de acceso a la justicia, y no se limite mi derecho de defensa, con motivo al decreto número 035, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de administración de Justicia e Integración del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el cual fue publicado el día 18 de diciembre de 2019, en Periódico Oficial del Estado número 073, Tomo III. Reservandome el

66

59

derecho a interponer el recurso que legalmente proceda en caso de haber restricción alguna.

**Décimo.-** Solicito copia de la demanda y de los anexos presentados en este ocurso.

**PROTESTO LO NECESARIO.**

Esta foja forma parte del escrito de demanda presentada, que dará inicio al Juicio Contencioso Administrativo, en contra de la Resolución de fecha 26 DE JUNIO DE 2019, suscrita por el PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. DOCUMENTO CONSTANTE DE 59 FOJAS ÚTILES.

45 ELEMENTOS ELIMINADOS. Justificación: Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial por ser vinculable a personas identificadas y/o identificables, asimismo, por encuadrar en los supuestos normativos previstos en la Constitución Política Federal y Local; así como los numerales: 120, 121, 129, fracción II, 139, y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

Fecha de clasificación: a los 11 días del mes de julio del año 2024.